

8. Restricción económica y protesta

Durante el pasado mes de enero el secretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta, anunció a través de los periódicos el nuevo plan de gastos e inversiones públicas del gobierno federal en el año de 1976. Este plan es drásticamente reducido para tratar de compensar la elevada tasa de crecimiento inflacionario de la economía.

Textualmente dijo Beteta: "El proyecto de presupuesto se caracteriza por darle preferencia a la terminación de obras y programas en proceso, disminuyendo al mínimo la iniciación de nuevos proyectos." Junto con esto, el secretario de Hacienda indicó, también, la reducción presupuestaria a los rubros de asistencia social, aunque omitió señalar el aumento sustancioso a las dependencias encargadas de la represión civil: poder judicial, industria militar, Procuraduría y Defensa Nacional.

En sus mismas declaraciones, Beteta indicó el objetivo del gobierno de no gravar las ganancias de los empresarios con nuevos impuestos o la elevación de las tasas ya existentes.

Las ensombrecedoras perspectivas de austeridad económica que para este año ofrece el secretario de Hacienda, se agudizarán más al considerar los siguientes datos de la producción nacional para 1975: la industria alimenticia del país mantuvo su volumen de producción igual al del año pasado, con un crecimiento mínimo del 0.4%; la industria textil decreció en un -2.1%; las industrias de línea blanca y electrónica aumentaron en un 0.2%; las de papel y celulosa bajaron su producción en un -1.5%; la industria metal-mecánica descendió en un -3.7%, y las minero metalúrgicas en un -6.9%.

Sumado a esto, los precios de bienes al consumidor crecieron, durante 1975, en un 28.5%, y la tasa de crecimiento de la inversión privada descendió del 10.9% en 1974 al 0.4% en 1975, calculando que para este año las tasas de desocupación obrera en las industrias manufactureras y extractivas serán de un 2%, aproximadamente, con lo que los volúmenes de desocupados en el país, durante 1976, ascenderán a los 7 millones de habitantes, aproximadamente.

El alto porcentaje inflacionario en los precios, que de 1971 a 1975 fue del 81.7%; las altas tasas de desocupación obrera; la política gubernamental de congelación de los salarios; el elevado crecimiento de la población económicamente activa (600 000 nuevos aspirantes cada año), que en su mayoría no encuentra ocupación, y la reducción de los porcentajes públicos destinados a las inversiones de bienestar social, forman, en conjunto, un sombrío panorama de necesidades populares insatisfechas y un creciente descontento político contra tal estado de cosas.

Ahora bien, la pregunta obligada aquí es saber por qué el gobierno, conociendo bien la naturaleza de los conflictos sociales que puede generar su política de austeridad económica, insiste tan señaladamente en ella. Las hi-

pótesis pueden ser varias. Una de ellas, la que nosotros creemos más correcta, es la que trataremos de explicar en las siguientes líneas.

A nuestro parecer, el gobierno está dispuesto, en la actualidad, a afrontar todos los riesgos sociales y políticos que pueden traer consigo sus proyectos de contracción del gasto público, en un momento en que la inversión privada ha decrecido a menos de cero, y la desocupación y el hambre popular aumentan. El motivo de tales riesgos habremos de encontrarlo en la necesidad del gobierno, de tratar de estabilizar los tipos de cambio con otras monedas internacionales y tratar de frenar la persistente alza de precios.

Las pretensiones últimas de este proyecto de gobierno son las siguientes: al estabilizar, en lo posible, las tasas de convertibilidad de la moneda mexicana con otras monedas extranjeras, es posible reiniciar sobre bases más estables y fijas el intercambio comercial, tanto de exportación como de importación, en la actualidad desquiciado mundialmente, por la profunda inflación y recesión en los países altamente industrializados, con los que más comercia el país.

Fijando los precios del intercambio con base en monedas cuyo valor sea estable, es susceptible para México evitar importar desde el extranjero la inflación económica, principalmente por intermedio del dólar norteamericano, en alta medida devaluado en los mercados internacionales.

Igualmente, logrando una mayor estabilidad en los cambios de monedas con el extranjero, las transacciones comerciales con el exterior se verían aumentadas al existir un patrón de cambio fijo.

Por el contrario, de seguir fluctuando el valor de las monedas, los precios de las mercancías que tiene que importar el país seguirían aumentando indefinidamente; los riesgos para el comercio de exportación serían altos porque nunca se sabría a ciencia cierta cual sería la tasa en que las mercancías se valorarían.

Por otro lado, de aumentar, también, continuamente el precio del dinero, las transacciones especulativas, así como los préstamos privados de los bancos a la industria y la agricultura decaerían sensiblemente, ya que las tasas de interés financiero aumentarían en alto grado; igualmente, los préstamos de la gran banca extranjera al Estado mexicano se limitarían drásticamente al no crecer sustancialmente la capacidad de pago del gobierno por la reducción de la capacidad productiva del país.

También, al contraerse las exportaciones nacionales, a causa de la recesión económica en otros países, y por los riesgos que implica para los exportadores mexicanos los desajustes monetarios internacionales, la entrada de divisas desde el exterior disminuiría y con ello la balanza de los pagos del país se volvería desfavorable al desarrollo económico nacional.

Es necesario señalar aquí el hecho importante de que uno de los factores más importantes que obstaculizan el desarrollo del sector exportador mexicano, es un gran sector de la banca norteamericana, interesada en generar altos volúmenes de inflación en los Estados Unidos, vía emisión de circulante

monetario, para mantener la industria armamentista muy vinculada con el gobierno de Washington.

Este sector financiero de los Estados Unidos especula también con el valor de las monedas, aumentando así los montos de los adeudos públicos que varios gobiernos, como el mexicano, tienen con dicha banca extranjera. Y es precisamente este grupo bancario el que ha promovido, en las esferas del gobierno norteamericano, la política de restricciones al comercio con México.

El resultado para nuestro país de las altas tasas inflacionarias de los precios, generada por el aumento sensible de las reservas monetarias mundiales; de la caída de nuestras exportaciones y aumento del valor de las importaciones; del crecimiento exagerado de la deuda pública al aumentar el valor del dinero; del desequilibrio de nuestra balanza de pagos y con ello la dificultad de ampliar la capacidad productiva del país a través de los medios de capital importados, todo esto, en conjunto, ha generado un crecimiento "cero" de la economía nacional; una profunda inestabilidad de precios en las mercancías que asusta a los productores, que restringe el crédito y empuja a los trabajadores, pero enriquece a los especuladores.

Es en México, precisamente, el sector bancario más atrasado y conservador, ligado a su contrapartida en los Estados Unidos, quien intenta aprovecharse de esta situación inflacionaria para medrar con los recursos de capital de las industrias más avanzadas, que son las que ofrecen mayores oportunidades de empleo, y con el salario de los trabajadores que no crece en la misma proporción que los precios de las mercancías.

Así, por ejemplo, es el sector más conservador de las finanzas norteamericanas, muy activo en México, quien para allegarse más recursos económicos a su depauperada banca, y haciendo uso de los cargos públicos en beneficio propio bajo el gobierno de Richard Nixon, estimuló la guerra de Vietnam, para sostener su industria militar, haciendo que el gobierno norteamericano para poder pagar los gastos armamentistas emitiera billetes, sin respaldo o garantía económica alguna, por un total de 800 000 millones de pesos de 1970 a 1973.

Es este volumen de dinero el que se volcó hacia distintas economías nacionales, incluyendo la nuestra, para obtener, a cambio de él, valores manufacturados o materias primas con que sostener su esfuerzo bélico. El resultado de todo esto, no fue sólo millones de civiles muertos, sino el desequilibrio de la economía internacional, al inundar el gobierno norteamericano el mercado mundial monetario con dólares devaluados.

Dentro de una perspectiva internacional en la cual el gobierno de los Estados Unidos se niega a participar en la solución de este problema, a través de un acuerdo mundial que comprometa a todos los países a

acumular todos sus excedentes en dinero en cuentas de reserva en el Fondo Monetario Internacional, para ser canalizados conforme a criterios y objetivos internacionalmente acordados, en lugar de invertirlos libremente

y desatar crisis monetarias por los cambios de una moneda a otra por razones políticas o especulativas,

es que el gobierno mexicano ha intentado asumir medidas de emergencias económicas, tales como preferir agudizar la situación del desempleo nacional a la elevación de los precios, como forma de inducir a la iniciativa privada a invertir sus capitales en la producción.

Imposibilitado el gobierno mexicano, por presiones políticas muy fuertes, a devaluar la moneda mexicana para estimular las exportaciones, a causa de las elevadas tasas inflacionarias en los precios y a la desfavorable balanza de pagos, ha optado por ahondar la recesión económica nacional con tal de equilibrar, en el país, las relaciones mercantiles de pago y estimular con ello el aumento de las inversiones privadas.

El gobierno se enfrenta en este proyecto, sin embargo, a varios riesgos. Uno de ellos, y el más importante, es la creciente insurgencia obrera, campesina y del ejército industrial de reserva, este último mejor conocido como el grupo de los habitantes de las colonias urbanas de "paracaidistas". El descontento popular como respuesta al desempleo y a la capacidad económica de los salarios, ha ido aumentando gradualmente, tanto en sectores rurales del país como urbanos. Las invasiones de tierra por jornaleros agrícolas hechas en el norte del país; el número alto de huelgas proletarias, a recientes fechas, principalmente las ubicadas en el Valle de México, y la resistencia estudiantil en algunas universidades de provincia contra los ataques de sectores retardatarios de gobierno, son muestra clara de los intentos de respuesta política que las nuevas organizaciones de masas intentan dar a la crisis económica que vive el país, la cual el gobierno intenta solucionar, mientras halla condiciones favorables para ello.

29 de febrero

Javier Rosas